



Vivir juntos

El reto del próximo siglo para los peruanos es lograr vivir juntos. Vivir, digo, no sólo sobrevivir ni menos matarnos entre nosotros. Vivir juntos, sin embargo, ha probado ser una tarea difícil para los que habitamos este territorio. Sobre todo, porque no significa vivir juntos de cualquier manera, sino vivir con bienestar y democracia, ambas cosas negadas en este Perú de fin de siglo.

Para vivir juntos es fundamental en el plano de la política formar una comunidad democrática de ciudadanos. Una comunidad porque en ella deberán competir distintas alternativas para llegar a consensos que hagan funcionar este país. Lo contrario es el campo de batalla, cruento o incruento, al que nos quieren acostumbrar quienes gobiernan. En el campo de batalla hay que destruir al rival e imponer un punto de vista, exactamente lo contrario a un espíritu de convivencia.

Formar una comunidad democrática no es un empeño reciente en nuestro país, y es más, podríamos decir que ha sido el objetivo fundamental de los partidos democráticos, al menos desde la crisis de 1930, teniendo su plasmación jurídica más seria en la Constitución de 1979. ¿Por qué no se ha logrado aún? Porque hay fuerzas muy importantes que quieren que vivamos sometidos al bienestar y la autoridad de algunos pocos.

Este es un punto fundamental a remarcar. No logramos vivir en comunidad democrática porque hay intereses a los que no les conviene que así sea, y no porque seamos incapaces de hacerlo por diferencias culturales o carencias educativas. Superar los obstáculos para la vida en común supone entonces la derrota política de quienes quieren imponer.

El objetivo de vivir juntos enfrenta así dos formas de entender la política: como enfrentamiento entre amigo y enemigo, y como competencia entre adversarios eventuales. La primera es la forma autoritaria, que en el Perú viene

de los tiempos oligárquicos y que se plasma de manera terrible en la identificación de la política con la guerra. Es más, necesita de la violencia porque busca excluir de la participación a las mayorías. La segunda es la forma democrática, que supone el pluralismo político y tiene como objetivo la inclusión de todos y permite, por ello, la estabilidad en el largo plazo.

La identificación de la política con la guerra se desarrolla abiertamente desde la década de 1980, en sus dos versiones: la política como guerra subversiva, encarnada por los grupos terroristas, y la política como guerra sucia, asumida por quienes dirigen a las Fuerzas Armadas. La derrota de la primera por la segunda va a dar la pauta del desarrollo político en estos últimos años.

La consecuencia más importante del triunfo de la guerra sucia es la subordinación, y si fuera posible la eliminación del entendimiento de la política como competencia democrática. Pero como esto es imposible de ser hecho formalmente, en términos jurídico-constitucionales, por la fuerza que hoy tiene la comunidad internacional en el cuidado de los derechos democráticos, se hace predicando la negación de la actividad política, en especial de sus vehículos privilegiados como son los partidos, identificándola como una actividad corrupta al servicio de los intereses privados de quienes la realizan.

Se busca desprestigiar así a la política abierta, a la política que se hace dando la cara y proponiendo alternativa, para dejar como la única actividad posible la política de los hechos consumados, que se hace desde el poder y por la fuerza, con razones aparentemente "técnicas".

Fujimori y el proyecto autoritario del que aparece como cabeza visible encarnan hoy este entendimiento de la política como guerra. En nuestro caso particular, como guerra contra todos

aquellos que se opongan a su intención excluyente. Por eso, es bien importante tener en cuenta que Fujimori y el régimen que encarna no representan la pacificación del país, sino la prolongación sorda del estado de guerra que desata- ra originalmente la insania terrorista y que se ha convertido ahora en la forma "normal" de gobierno del Perú. La actual campaña electoral es un escenario privilegiado para observar cómo entiende la política el gobierno de turno, qué respeto le merecen sus rivales y, en última instancia, los ciudadanos de este país.

En estas condiciones hacer prevalecer la política como competencia democrática en la esperanza de poder fundar en el futuro la comunidad de que hablábamos es un trabajo arduo. Quizás el primer paso hacia ese objetivo sea la necesidad de abrir nuevamente la arena política a la libre competencia entre distintos actores. El gobierno actual ya se ha mostrado incapaz para proceder a esta apertura, y con su incapacidad nos envía el mensaje de que necesita que no haya competencia real para poder gobernar. Hay necesidad entonces de reemplazarlo.

No importa mayormente hoy qué opción democrática lo reemplace; basta con que se comprometa a reabrir y garantizar la competencia democrática. Por eso hemos insistido todos estos meses que, si esta es la tarea, debemos oponer un solo candidato demócrata a las intenciones reeleccionistas del actual mandatario.

Reabrir la competencia política en un futuro gobierno democrático es lo que permitirá llegar a consensos sobre cómo alcanzar el bienestar. Mientras el escenario permanezca cerrado y no se conozcan ni siquiera las cifras del fracaso actual poco es lo que se puede definir al respecto. De esta manera, lo que hoy parece utopía, la posibilidad de vivir juntos, se irá poco a poco haciendo realidad. ■